



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-023-2019-00197-01
Demandante: Efraín Villa Escobar
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Asunto: Apelación sentencia
Procedencia: Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Nivelación salarial, sanción moratoria

Medellín, mayo cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, con ausencia justificada y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, el 1º de marzo de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor EFRAIN VILLA ESCOBAR en contra de

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.. Radicado 05001-31-05-023-2019-00197-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor EFRAIN VILLA ESCOBAR, llamó a juicio a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., pretendiendo se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 29 de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2017; se declare que las funciones desempeñadas durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 al 31 de agosto de 2014, corresponden al cargo de profesional categoría B y las desempeñadas durante el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 2014 al 31 de marzo de 2017, corresponden al cargo de profesional categoría C; se declare que no existe justificación razonable, teniendo en cuenta las funciones, horario, capacidad, experiencia, capacitación, eficiencia, que amerite el trato discriminatorio del demandante en cuanto al sueldo percibido por la señora Eugenia Ángel, quien actualmente cumple las mismas funciones, pero esta remunerada bajo la categoría C9.

Como consecuencia de lo anterior, peticiona se condene a EPM E.S.P. al pago de forma retroactiva de la nivelación salarial indexada, al pago del reajuste de las prestaciones sociales por los periodos objeto de nivelación, tales como, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de antigüedad, los aportes al sistema general de pensiones, asimismo se condene al pago de la sanción moratoria del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 1º de enero de 2007, la sanción moratoria dispuesta en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 y se condene al pago de los perjuicios morales como parte de la reparación integral.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Efraín Villa Escobar es ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos, que tuvo contrato de trabajo con Empresas Públicas de Medellín, a término indefinido, desde el 29 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2017, con categoría para toda la relación de profesional A10, siendo designado para desempeñarse como interventor de contratos de obra civil, refiriendo que EPM tiene en su estructura los cargos de técnico, tecnólogo y profesional y a su vez, los profesionales están clasificados en categorías A, B y C., clasificación que se establece para diferenciar las funciones de cada categoría y el salario, siendo A la categoría menor y C la categoría mayor.

Se narró que las funciones desarrolladas por el demandante en el periodo 1° de enero de 2007 al 31 de agosto de 2014, corresponden a la categoría B, siendo claro conforme a los manuales de funciones que los profesionales con categoría A no pueden ejercer el rol de interventor o similares, especialmente las actividades de acueducto y alcantarillado, ya que se exige una experiencia específica mínimo de 6 años, la cual no tiene un profesional A, en igual sentido, las funciones desarrolladas entre el 1° de septiembre de 2014 a 31 de marzo de 2017, corresponden a la categoría C, teniendo en cuenta que fue nombrado líder de lote de control de las redes de acueducto en el proyecto Centro Parrilla, cargo que conforme a la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) es para profesionales categoría C.

Continuó explicándose que, desde septiembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2017, el actor ejerció las mismas funciones de igual forma que lo hizo su homóloga en Centro Parrilla, ingeniera Eugenia Ángel Rengifo, líder de lote de alcantarillado, a quien se le reconoció un salario de profesional C9, equivalente a \$10.518.221, mientras que el accionante percibió salario de \$5.111.231, sin que exista justificación objetiva para esa situación, pues no existe diferencias en cuanto a las funciones, experiencia general y específica, nivel académico,

eficiencia en las actividades realizadas, complejidad, responsabilidades, e intensidad de las actividades.

Finalmente, se adujo que el actor radicó reclamación administrativa en la cual solicitó la nivelación salarial, el 4 de noviembre de 2016, y mediante comunicación fechada del 23 de noviembre de 2016 Empresas Públicas de Medellín respondió negativamente la solicitud.

1.2.- CONTESTACIÓN

Al replicar la demanda, **EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.**, por intermedio de apoderada aceptó como cierta la existencia de la relación laboral, en los extremos enunciados, que entre las funciones desempeñadas por el demandante se encuentran las asociadas a la interventoría de los contratos, aclarando que a partir del año 2014, se cambió el modelo de trabajo de interventoría directa a interventorías contratadas, por lo que los servidores ya no realizaban dicha actividad directamente, en igual sentido, que es cierto lo relativo a la estructura de los cargos y su clasificación en A, B y C, desempeñándose el actor como profesional A, siendo también cierto que el 14 de noviembre de 2016 el señor Efraín Villa radicó reclamación administrativa y que a la misma se le dio respuesta.

Manifestó no constarle que el demandante realizara funciones de profesional C, por cuanto, revisada la hoja de vida laboral del mismo, no se halló constancia alguna que se haya realizado un cambio en el cargo y por ende en las funciones de profesional A a las de de profesional C, afirmando que el actor siempre realizó las funciones propias de un profesional A, gestión proyectos e ingeniería, no siendo cierto que el señor Efraín Villa y la señora Eugenia Ángel Rengifo realizaran las mismas funciones, toda vez que la señora Ángel, además de tener asignado el lote de trabajo de alcantarillado, el cual es de mayor complejidad debido al seguimiento y control en la ejecución, el uso

de las tecnologías Zanja, apenas en desarrollo para la ciudad de Medellín, también fue encargada de realizar las funciones de líder del proyecto.

Narró que el demandante estuvo desempeñando las funciones de profesional B proyectos e ingeniería, mediante encargo, especialmente durante el tiempo que estuvo el titular del cargo, señor Víctor Hernán Giraldo Calderón, en una comisión de servicios en Chile, esto es, del 26 de noviembre de 2014 al 5 de junio de 2016, periodos durante los cuales le fueron reconocidos los salarios y las prestaciones sociales correspondientes a las de un profesional B, concluyendo que las demás afirmaciones no corresponden a hechos sino a interpretaciones y apreciaciones que hace el demandante, por demás equivocadas.

En oposición al éxito de las pretensiones formuló las excepciones de prescripción trienal; falta de causa y carencia de acción; inexistencia sustancial del derecho; pago; compensación; buena fe y la excepción genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 1º de marzo de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró que al señor Efraín Villa Escobar, le asiste derecho a su nivelación salarial como profesional categoría B con respecto a su homóloga Eugenia Ángel Rengifo, entre el 1º de septiembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, por tanto, Empresas Públicas de Medellín, deberá reajustar el valor de su liquidación final de prestaciones sociales y laborales de manera indexada, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y parcialmente probada la excepción de compensación entre el 26 de noviembre de 2014 y el 05 de junio de 2016; absolvió a Empresas Públicas de Medellín de las demás pretensiones y condenó en costas a la demandada.

1.4.- RECURSO

Demandante

Inconforme con la decisión el apoderado del demandante interpone recurso de apelación, solicitando se revoque parcialmente la decisión, para que se ordene la nivelación a la categoría C, señalando el a quo, hizo prevalecer la forma sobre la realidad, poniendo como ejemplo el tema del encargo a Profesional B, que termina siendo lo que para el juez justifica un trato diferente, y por eso en el segundo periodo no ubica al demandante en la categoría más alta, considerando que es equivocado el análisis que se hace, donde no se ubica al demandante en la cargo más alto, como lo tuvo la señora Ángel.

Apela la absolución a la indemnización moratoria, por aplicarse una interpretación diferente a la adoptada por la Corte Suprema de Justicia, pues el juez indica que el actor no demostró la mala fe y en las distintas sentencias de la citada Corporación, se dice que, en cada caso, se tendrá que analizar la conducta del empleador para no pagar y no se demuestra por parte de la empresa una justificación clara que permita exonerar a la entidad del pago de la indemnización moratoria. Agrega que consideró el despacho que el pago de la indemnización se da cuando no hay pago al terminar el vínculo laboral y no cuando hay un reajuste, considerando que esa interpretación es totalmente ajena no solo a la parte dogmática y exegética, sino a la interpretación que la Corte ha dado, pues tanto el artículo 65 del CST como el Decreto 797 de 1949, son claros en señalar que lo que se busca es que al terminar el vínculo laboral se dé un pago completo de las prestaciones sociales y salarios, por lo que la mora procede cuando el pago es deficitario, expone que se estaba solicitando también en las pretensiones que se cancelara la mora porque no se pagó correctamente las cesantías.

Demandada

Interpone el recurso de apelación de manera parcial sobre la condena realizada entre el 1 de septiembre de 2014 y el 13 de marzo de 2017, en la que se considera que el señor Villa desarrolla las funciones de profesional B y debía ser nivelado a esta categoría, refiriendo que el demandante circunscribió su comparación en los tiempos señalados bajo la categoría de profesional C, lo que es importante, porque en virtud de la congruencia y del debido proceso a la demandada se le dio la oportunidad de defenderse en el proceso frente a una comparación bajo una categoría salarial de profesional C, entre la época de 2014 a 2017.

Comparte con el despacho la determinación de que al EPM ser una entidad pública se tiene una planta de cargos plenamente identificados, creados por acto administrativo que expide una junta directiva, contando con una presunción de legalidad, entonces cuando la entidad llega a defenderse por los periodos que hoy se condena, se aportan los elementos probatorios para desvirtuar una categoría salarial C, entre ella los manuales de cargo C, al realizar la adecuación a profesional B por parte del despacho, se considera que se presenta una violación al debido proceso a EPM.

Otro aspecto sobre el que llama la atención, lo es que el despacho no se pronunció sobre los procedimientos de ingresos y ascensos en EPM, que están debidamente reglados por acto administrativo, que también cuentan con la presunción de legalidad y no fueron atacados, bajo esa medida, para que una persona pueda ascender como lo pretende el señor Efraín, debe presentarse a esos procesos, y en efecto el demandante manifestó en el interrogatorio, que se había presentado y que no superó el aspecto técnico o los requisitos, como lo es el inglés para un profesional C, estando probado que el demandante, si bien participó en procesos de selección para el ascenso no superó las etapas necesarias para acceder al mismo, sin que se pueda por un proceso judicial circunscribir la diferencia salarial, sin considerar los requisitos propios del cargo.

Resalta el apelante el testimonio del jefe o líder Hugo López, quien, señaló que la señora Eugenia y el señor Efraín lideraban dos lotes dentro del proyecto, pero Eugenia era la mano derecha del jefe, situación de la cual no participaba Efraín, por lo que no se puede decir que tenían las mismas funciones, porque cuando uno es el respaldo o la mano derecha de un líder entra con otro tipo de responsabilidades y en términos de la Corte Suprema, para que exista una nivelación salarial deben probarse iguales funciones y no similitudes, porque la igualdad está circunscrita a factores que si bien son desde el quehacer son también objetivos, existiendo una indebida valoración probatoria.

Aseveró que indicó el despacho que no cuenta con los elementos para determinar la complejidad de los proyectos de alcantarillado y acueducto, no obstante de la prueba testimonial quedó plenamente establecido que hay diferencias entre ambos proyectos, en complejidad y responsabilidades, situación que el despacho no tuvo en cuenta con los testimonios dados por los profesionales, lo que justifica la diferencia de las funciones desarrolladas por la señora Eugenia y las desarrolladas por Efraín, destacando que la Corte Suprema de Justicia en Sentencia con radicado 24272 del 10 de junio 2005, determinó que existen funciones adicionales que permiten y justifican una diferencia salarial, entonces no se puede igualar la categoría de líderes al tener uno más responsabilidad que otro.

Por lo anterior considera que existe una objetividad en la diferencia salarial entre el señor Efraín Villa con el profesional que se compara que es la señora Eugenia, quien tenía mayor conocimiento y responsabilidades por lo que nivelación salarial como profesional B, no puede prosperar, solicitando se revoque la sentencia en esos términos.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de las partes, reiterando los argumentos esbozados al sustentar el recurso de apelación.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron de acuerdo con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

-La relación laboral que existió entre el señor Efraín Villa Escobar y Empresas Públicas de Medellín, regida por un contrato laboral a término indefinido, entre el 29 de abril de 2002, hasta el 31 de marzo de 2017, desempeñando funciones de Profesional categoría A, tal y como es admitido por la accionada y como se desprende de la certificación obrante a folios 251 a 258 del anexo *01 Expediente digital*.

-Que el señor Efraín Villa Escobar, estuvo encargado como profesional B proyectos, entre otros periodos, del 26 de noviembre de 2014 al 5 de junio de 2016, conforme a la certificación emanada de la Unidad Compensación y Beneficios de EPM, glosada a folios 251 a 258 del anexo *01 Expediente digital*.

2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Es procedente modificar o revocar la sentencia proferida por el señor Juez Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, para lo cual deberá determinarse, si el promotor del proceso ejerció funciones correspondientes al cargo de profesional C Proyectos, tal y como se afirma en la demanda o si, por el contrario, sus funciones lo fueron las correspondientes al Profesional A proyectos, para el cual fue contratado, como lo sostiene la pasiva?

¿Si se vulneró el derecho de defensa y contradicción a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., al declararse que el accionante tiene derecho a la nivelación salarial respecto del profesional B Proyectos, siendo que la nivelación pretendida lo fue en relación con el cargo de profesional C Proyectos?

¿Si hay lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la sanción moratoria dispuesta en el artículo 1° del Decreto 797 de 1949?

2.4.- TESIS

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual el señor Efraín Villa Escobar, no logró acreditar, que en efecto realizara las mismas funciones y en similares condiciones de calidad y eficiencia, respecto de las funciones realizadas por la señora Eugenia Ángel, no avizorándose la existencia de un trato discriminatorio derivado de la remuneración del actor como profesional A Proyecto, razón por la cual, deberá REVOCARSE la sentencia de primera instancia, para en su lugar absolver a Empresas Públicas de Medellín ESP.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 53 de la Constitución Política preceptúa:

“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.

En ilación a ello, el artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 establece:

“ARTÍCULO 5º. La diferencia de salarios para trabajadores dependientes de una misma empresa en una misma región económica y por trabajos equivalentes, solo podrá fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, de antigüedad, de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento en la obra, y en ningún caso en diferencias de nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales. Queda absolutamente prohibido a los patronos imponer a los trabajadores obligación alguna de carácter religioso, político o electoral; impedirles o dificultarles en cualquier forma el ejercicio del derecho de sufragio; retenerles, conservarles o custodiarles cédulas de ciudadanía; y hacer, autorizar o tolerar cualquier propaganda de las indicadas en los sitios y durante las horas de trabajo, y todo género de rifas y colectas en los mismos”.

En igual sentido, el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 1496 de 2011, prevé:

“ARTICULO 143. A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL.

- 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127.*
- 2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales.*
- 3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación”.*

Sobre el principio de *a trabajo igual salario igual*, que deriva de las disposiciones antes citadas, la Corte Constitucional sostiene:

“El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación” (Sentencias SU-519 de 1997, T-545 de 2007, T-833 de 2012, T-369 de 2016).

Sin embargo, el órgano constitucional de cierre también tiene por adoctrinado que:

“... la igualdad de trato en la relación laboral, no solo se deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos, sino de la esencia de la garantía superior al trabajo, y por lo tanto, no todo desequilibrio, desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración directa de la carta política, toda

vez que un trato diferente solo deviene en discriminatorio cuando no obedece a causas objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la constitución, cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios objetivos y válidos” (Sentencias SU-519 de 1997, C-665 DE 1998, T-835 de 2000, T-833 de 2012).

Y es por ello que en cada caso particular y concreto debe demostrarse si los cargos con funciones idénticas, son desempeñados por trabajadores que se encuentran en un mismo plano de igualdad, en cuanto a la eficiencia, calidad y cantidad de trabajo, y experiencia en las actividades que ejecuta, así como su nivel profesional o académico, entre otros aspectos, razón por la cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiteradamente precisado:

“En esa dirección, durante décadas se ha mantenido la jurisprudencia reiterada de esta Sala de la Corte según la cual, es legítimo que existan diferencias en la remuneración de los trabajadores, siempre y cuando estén fundadas en razones objetivas que no respondan al arbitrio del empleador o a odiosas diferencias originadas en el sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica del trabajador, tal y como lo prohíbe el art. 13 de la C.P. de 1991 y lo consagran los convenios 100 y 111 de la OIT ratificados por Colombia, a través de los cuales también se regula la igualdad y no discriminación retributiva en las relaciones de trabajo subordinado” (CSJ SL del 10-06-2005, radicado 24272; SL del 23-01-2007, radicado 27724; SL del 15-07-2014, radicado 46853; SL14403-2015; SL-12814-2016; SL17063-2017; SL1682-2018; SL1662-2021).

En efecto, lo que debe probar el trabajador que solicita la nivelación salarial es la diferencia de salarios y la identidad de cargo, y al empleador le corresponde probar que dicha diferencia obedece a factores objetivos. En tal sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, predica que *“... no basta comparar las funciones generales de cada nivel y naturaleza del cargo, ni exponer que la demandante sea una profesional o no, en la medida de que esto sólo daría una aproximación y no la identidad requerida para aplicar dicha nivelación salarial, dado que como lo dedujo el*

ad quem, debe estar debidamente comprobado en la litis, que la accionante desempeñó las mismas funciones de una persona que ejerciera como profesional” (CSJ SL del 03-069-2009, radicado 35593); en otras palabras, “... el principio de la carga dinámica de la prueba, indica que cuando un trabajador considere que no se le ha dado trato equivalente o igual, debe aportar el término de comparación de donde se deduzca el trato desigual, y le correspondería al empleador demostrar que el trato diferente es razonable y objetivo, con lo cual se invierte el onus probando” (CSJ SL del 08-05-2012, radicado 40356; SL16404-2014, radicado 43090).

2.6.- CASO CONCRETO

En el asunto sometido a consideración de la Sala, no hay discusión alguna en torno a la relación laboral que existió entre el señor Efraín Villa Escobar y Empresas Públicas de Medellín, la cual estuvo vigente entre el 29 de abril de 2002, hasta el 31 de marzo de 2017, en igual sentido, que el actor desempeñó el cargo de Profesional A Proyectos, con algunos encargos como Profesional B Proyectos, debiéndose determinar, si hay lugar a ordenar la nivelación salarial del actor como Profesional B durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2007 al 31 de agosto de 2014 y como Profesional C entre el 1º de septiembre de 2014 al 31 de marzo de 2017.

Sea lo primero señalar, que el a quo encontró que, por el primer periodo solicitado en la demanda, 1º de enero de 2007 al 31 de agosto de 2014, el pretensor no logró acreditar que hubiera realizado funciones correspondientes al Profesional B, máxime cuando no cumplía con la totalidad de requisitos exigidos para dicho cargo, específicamente el relacionado con la formación académica, al no contar con especialización, título que obtuvo con posterioridad al año 2012, análisis que a juicio de este Juez Plural se exhibe acertado.

Adicionalmente, el funcionario de primera instancia declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, para lo cual tuvo en cuenta que la reclamación administrativa, con la cual se interrumpió la prescripción fue radicada por el accionante el 4 de noviembre de 2016 y en atención a ella, el ciclo en el cual se pretendía la nivelación como Profesional B, se veía afectado en su totalidad por la prescripción, reflexión que, en igual sentido, se encuentra ajustada a derecho. Por lo anterior, y toda vez que la parte actora no efectuó reparo alguno respecto de la prescripción declarada, es claro para la Sala, que no hay lugar a efectuar un análisis de ese primer periodo del cual se perseguía la nivelación, centrándose el foco de discusión, exclusivamente en establecer, si como se reclama en la demanda el pretensor desarrolló las labores correspondientes a Profesional C Proyectos, entre septiembre de 2014 y marzo de 2017.

De cara a lo anterior, debe indicar la Sala, que no está llamado a prosperar el recurso de apelación formulado por el apoderado del extremo activo de la litis, por medio del cual pretende se ubique al demandante en el cargo más alto, como lo tuvo la señora Eugenia Ángel Rengifo, atendiendo a lo siguiente:

En primer lugar, conforme a la documental allegada se establece que el cargo de la ingeniera Eugenia Ángel Rengifo, es el de Profesional B Gestión Proyectos e Ingeniería, así consta en la certificación obrante a folio 44 del anexo *01 Expediente digital*, expedida por la Unidad de Proyectos Lineales 2, y en la certificación expedida el 18 de enero de 2018 por la Unidad de Compensación y Beneficios, la cual milita a folios 245 del anexo *01 Expediente digital*.

En segundo lugar, la prueba testimonial recaudada fue unánime en señalar que la señora Eugenia Ángel Rengifo, era profesional B, así lo manifestó la señora Lina María Sierra Lema, testigo presentada por la parte actora y los señores Ramón Alonso Álzate Montoya, Hugo León López Arenas y la propia

ingeniera Eugenia Ángel, testigos presentados por EPM, destacándose especialmente, que la propia Eugenia Ángel Rengifo, manifestó en su declaración, bajo la gravedad del juramento, que siempre ha sido profesional B proyectos y nunca ha sido profesional C, diferente es que, atendiendo a los encargos que tuvo, realizara funciones adicionales y en atención a ello, obtuviera una remuneración superior a la de Profesional B, situación que será analizada a fondo más adelante.

Por lo anterior, concluye la Sala que se queda sin piso las aspiraciones del actor al pretender el reconocimiento salarial del profesional C, comparándose para ello, con una profesional B.

Ahora, estimó el a quo que el demandante tenía derecho a la nivelación como profesional categoría B con respecto a su homóloga Eugenia Ángel Rengifo, entre el 1º de septiembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, descontando el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2014 y el 05 de junio de 2016, ciclo en el cual el señor Efraín Villa Escobar, tuvo un encargo como Profesional B y recibió la remuneración correspondiente a B, tras considerar que el señor Villa Escobar y la señora Ángel Rengifo, como líderes de lote ejercían las mismas funciones, en los mismos horarios, bajo las mismas condiciones en la categoría B en el proyecto Centro Parrilla y que si bien se encontraban en frentes diferentes, uno en acueducto y la otra en alcantarillado, ambos requerían un liderazgo similar, sin que estuviera probado que uno fuera más complejo que el otro, afirmaciones de las cuales disiente esta Sala de Decisión.

Es claro, de acuerdo con la prueba aportada que para finales del año 2014 tanto el demandante como la señora Eugenia Ángel, hicieron parte del equipo del proyecto denominado Centro Parrilla, proyecto en el cual fungió como líder el señor Hugo León López Arenas y en el cual el actor desempeñó el rol de líder del lote de acueducto y la señora Eugenia Ángel, el de líder del lote

alcantarillado, relevando que, como tesis de defensa, Empresas Públicas de Medellín, sostiene entre otros puntos, que el lote de alcantarillado, es de mayor complejidad, respecto del lote de acueducto, afirmación que a juicio de la Sala encuentra pleno respaldo probatorio, pues obra en el proceso a folios 42 y 43 del anexo 01 *Expediente digital*, el EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) correspondiente a los años 2015 y 2016, del cual se desprende que en efecto, como fue narrado por los testigos presentados por la pasiva, y como fue advertido por el demandante al rendir su interrogatorio, el Proyecto Centro Parrilla, se dividió en seis lotes, los cuales son: Gestión de proyecto a cargo del señor Hugo López, lote de contratación, lote de gestión ambiental y social, lote de acueducto, cuyo responsable es el demandante, lote de alcantarillado a cargo de Eugenia Ángel y el lote de obras de terceros, evidenciándose de la visualización de los EDT que el lote de acueducto presenta dos pilares, mientras que el de alcantarillado presenta tres pilares, contando el lote de alcantarillado con la participación de un número mayor de empleados en relación al de acueducto, de donde se desprende que, la señora Eugenia Ángel, en su función de líder, debía coordinar el trabajo de más personas, siendo ello indicativo de que el lote si representa un mayor grado de complejidad.

En igual sentido, se encuentra a folios 60 a 63 y 64 a 67 del anexo 01 *Expediente digital*, la descripción de las funciones del líder del lote de acueducto y las funciones del líder de alcantarillado respectivamente, documentos de los que se extrae, que si bien ambos tienen en general las mismas funciones generales, dirigidas a cada frente, el líder de lote de alcantarillado cuenta con 3 funciones adicionales, como lo son i) *participar en el estudio de proyectos de expansión, reposición y optimización de redes e infraestructura de los sistemas de alcantarillado; ii) participar en la definición y estructuración de convenios inter-administrativos y presentar necesidades de los sistemas, requisitos técnicos, cantidades, especificaciones, costos etc. conjuntamente con los las entidades municipales y iii) programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades asociadas al desarrollo de los convenios interadministrativos asociados a las obras e*

infraestructura de los sistemas de Aguas Residuales, tales como el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Adicionalmente, en los documentos referenciados se consignó que el líder de lote de acueducto tiene a cargo tres contratos de obra civil: CT-2014-001952, CT-2014-001953 y CT-2014-001954, mientras que la líder de lote de alcantarillado tiene a su cargo cuatro contratos de obra civil: CT-2014-001952, CT-2014-001953, CT-2014-001954 y CT-2014-02164 y sumado a ello, dos contratos de asesorías CT-2015-001312 y CT-2015-001313, señalándose que el valor estimado del lote de acueducto es de \$44.355.000,000 mientras el valor del lote de alcantarillado un valor de \$189.901,000.000 cuadruplicando el valor del lote de acueducto, referenciándose que el lote de alcantarillado se considera de alta complejidad, debido al seguimiento y control en la ejecución y uso de las tecnologías sin zanja que se utilizan para la construcción de las redes alcantarillado.

En relación con la prueba testimonial presentada por la parte actora, correspondiente a las declaraciones de los señores Lina María Sierra Lema, Fredy Leonardo Paredes Peña, José Alberto Álzate Hoyos y Luis Fernando Patiño Patiño, debe indicarse, que, si bien a grandes rasgos es coincidente en señalar que el demandante como líder del lote de acueducto realiza las mismas funciones que la señora Eugenia Ángel, como líder de alcantarillado, dichas afirmaciones no tienen la contundencia suficiente para desvirtuar la prueba documental y llevar a la Sala a la convicción de que en efecto las funciones desarrolladas por ambos eran iguales y eran desarrolladas en las mismas condiciones.

Lo anterior, por cuanto la señora ***Lina María Sierra Lema***, quien fue compañera de trabajo del demandante, indicó que trabajó con el actor hasta abril de 2013, que pasó a EPM sin fronteras, por lo que no le correspondió trabajar en Centro Parrilla, considerando la Sala, que al no participar del

mismo proyecto Centro Parrilla, no puede con claridad y certeza dar fe de que las funciones de los líderes de lote se desarrollaban en las mismas condiciones, adicionalmente manifestó que no había diferencia en la funciones de los líderes, sin embargo reconoce que la diferencia es el servicio, que ambos tienen normas y especificaciones diferentes de diseño, construcción y puesta en operación, situación que a criterio de la Sala impide se puede realizar un análisis de equivalencia en las condiciones del desempeño de las funciones, finalmente, se resalta que afirmó la deponente que considera que por la complejidad del proyecto Centro Parrilla, el líder de lote debía cumplir funciones de un C, manifestación que corresponde a una opinión personal, carente de sustento, máxime cuando la líder con la cual se compara el actor, era profesional B.

Por su parte, el señor ***Fredy Leonardo Paredes Peña***, ingeniero sanitario, manifestó que conoció al demandante en junio de 2015, cuando entró a trabajar a EPM, que el actor era el líder de acueducto en el proyecto Centro Parrilla, que el jefe de ambos era Ramón Álzate, jefe de proyecto de la unidad, y el director de proyecto Centro Parrilla, era Hugo López, que Eugenia Ángel y el accionante tenían las mismas funciones porque eran líderes de lote y cuando había reuniones de interventoría el ingeniero Hugo siempre iba con los ingenieros Eugenia y Efraín, que estaban ellos tres y a veces invitaban a otros miembros del equipo, refirió que no trabajó en el lote del demandante, que recuerda que iniciado el proyecto hubo un tema como de una discordia porque le iban a dar el cargo de líder a otro ingeniero y finalmente se lo dieron a la ingeniera Eugenia, como parte del equipo, le dieron un encargo, que cree que fue ahí que le mejoraron las condiciones salariales, el rol y no sabe si las funciones, porque eso si lo desconoce, señalando que Eugenia lideraba el lote al que pertenecía que era el lote de alcantarillado y después le asignaron el tema de urbanismo.

De lo dicho por el testigo, surge palmario que no puede predicarse una igualdad de funciones entre el demandante y la señora Ángel Rengifo, en tanto que el declarante da cuenta de un encargo adicional que le hicieron a la señora Eugenia Ángel, a raíz del cual le mejoraron las condiciones laborales y que añadido al lote de alcantarillado, le agregaron el tema de urbanismo, relevando que este testigo refirió como fecha en que conoció al demandante junio de 2015 y conforme a la documental glosada se tiene que mediante Resolución N° 2015-RES-7968 del 22 de junio de 2015, Empresas Públicas de Medellín, encargó a la señora Eugenia Ángel Rengifo como líder de proyecto, situación que resulta armónica con lo narrado por el testigo y precisamente atendiendo a esa situación particular, mal podría el deponente afirmar la existencia de una igualdad de funciones del demandante en relación a la ingeniera Eugenia Ángel, basado solo en el hecho de que los dos asistían a las reuniones con el líder de proyecto, sin que se respalde la afirmación en otros hechos concretos.

En relación al testigo **José Alberto Álzate Hoyos**, se tiene que el mismo informó que trabajó en EPM hasta el año 2012, de ahí que no tiene conocimiento directo de las funciones que hubiera desempeñado el actor en el proyecto Centro Parrilla, toda vez que el proyecto no había iniciado cuando salió de EPM, señalando que no sabe si el demandante era líder, que conoció a Eugenia, pero tampoco trabajó, ni tuvo relación directa con ella y en atención a ello, nada le aporta en este punto al proceso.

En igual sentido, se considera que el testimonio rendido por el señor **Luis Fernando Patiño Patiño**, tampoco suministra mayores elementos de convicción a la judicatura, pues si bien señaló que siempre reconoció al demandante como líder, al igual que a Eugenia, uno en acueducto y otro en alcantarillado y que estos cumplían las funciones inherentes al cargo del líder, no proporciona información adicional respecto de cuáles eran las funciones y aunado a ello refirió que no sabe si Efraín ganaba más que Eugenia o Eugenia más, los reconoce como líderes, pero no en jerarquías, aceptando que en la

parte administrativa nunca se fijó y que no sabe si Eugenia fue encargada de una planta temporal como líder de proyecto.

Contrario a la aspiración de la activa, se tiene que los testigos presentados por la llamada a juicio, son contundentes en señalar que el ingeniero Efraín Villa, de quien no desconocen era el líder del lote de acueducto, no realizaba las mismas funciones que la ingeniera Eugenia Ángel, estando acreditada la razón del conocimiento de sus dichos y que tenían una relación directa con el desarrollo del proyecto Centro Parrilla.

También importa relieves que el señor ***Ramón Alonso Álzate Montoya***, quien es el Jefe de la Unidad Proyecto Redes Aguas y posteriormente de Proyectos Lineales dos, fue enfático en señalar, que el demandante nunca fue líder del proyecto, que los líderes fueron Claudia Villegas, en etapa de diseño, después Cesar Mauricio Muñoz, cuando estaban contratando y por último Hugo León López y Eugenia Ángel, que la señora Eugenia además de ser responsable del lote de alcantarillado, tenía una responsabilidad en todo el proyecto como líder del proyecto, correspondiéndole la gestión social, recursos necesarios, parte financiera, etc., al igual que Hugo López que también estaba como líder de proyecto, refiriendo que Eugenia tenía el cargo de profesional B proyectos y por el encargo como líder de proyecto tenía una remuneración más alta. Expuso que todo proyecto se descompone en lotes de control y lotes de trabajo, el responsable de un lote de trabajo no tiene que ver con los otros lotes, ni el proyecto como tal, sino con la parte que se le asigna como responsable, en ese sentido el demandante solo era responsable del lote de acueducto, afirmando como jefe de la señora Eugenia y el señor Efraín, que no realizaban las funciones en idénticas condiciones, que la responsabilidad del líder de proyecto es mucho más grande que la de un lote de trabajo, porque tiene que mirar el proyecto en su globalidad, que a los grupos primarios asistían los líderes de proyecto y no de lote, por lo que Efraín nunca fue citado a los grupos primarios de líderes de proyectos.

Manifestó el señor Alzate Montoya, que el profesional que se requería para el lote de alcantarillado tenía que tener un cargo superior al que tenía el responsable del lote de acueducto por la complejidad del proyecto, que en el periodo en que al actor se encargó como profesional B, no se le encargaron funciones adicionales, que eso fue para estimularlo, aduciendo que el actor trato de buscar ese cargo por convocatoria, pero no logró pasar las convocatorias y que las funciones realizadas eran propias de profesional A.

Por su parte el señor **Hugo León López Arenas**, líder del proyecto Centro Parrilla, declaró que el demandante nunca fungió como profesional C, estuvo como profesional A y encargado como profesional B, aduciendo que cuando resultan esas vacantes se da oportunidad a otros profesionales para encargarlos y promocionarlos, con el reconocimiento económico. Refirió que Efraín era el responsable del lote de trabajo de acueducto, cada lote tenía un profesional responsable, que podría ser un B, un A, un C, que Eugenia Ángel era la responsable del lote de alcantarillado, tenía las mismas funciones de Efraín como líder de acueducto para garantizar la adecuada intervención de las redes, explicando que en Centro Parrilla sucedió una situación un poco atípica debido a la complejidad que tenía en tiempo, costo, numero de contratos, número de personas, que el proyecto tenía un costo casi de \$300.000.000.000 (trescientos mil millones de pesos) que por ser ese proyecto complejo, cuando llevaban un 40%, 50% del proyecto se vio la necesidad de nombrar otro líder que lo apoyara y se nombró a Eugenia como líder, ya que él se estaba quedando corto para responder todos los requerimientos del proyecto, a medida que avanzó el proyecto se dispararon unos lotes como era temas de reclamaciones, atención a reclamos, conferencias en congresos nacionales e internacionales, atención a terceros, entre otras y como no podía estar 100% ateniendo las necesidades a Eugenia además del rol que tenía como responsable del lote de control y alcantarillado se le nombró en encargo como líder con ese reconocimiento, fuera de eso a Eugenia se le nombró líder de un proyecto que se llama Interceptor Sur, explicando que ella trabajaba como

responsable del lote de alcantarillado en Centro Parrilla, con funciones de líder o directora para apoyar la dirección del proyecto y con funciones de líder en otro proyecto Interceptor Sur, afirmando que Efraín y Eugenia no realizaban funciones en idénticas condiciones, ni tenían idénticas responsabilidades.

Finalmente, la señora ***Eugenia Ángel Rengifo***, testigo que en criterio de la Sala resulta de la mayor relevancia, en tanto es con quien pretende el demandante se realice la comparación de las funciones, manifestó que Efraín nunca desarrolló funciones de líder de proyecto, que el líder del proyecto fue Hugo López y por la magnitud del mismo a mediados de 2015 fue encargada como líder de proyecto, un cargo temporal, que su cargo siempre ha sido profesional B; responsable de todo el tema de alcantarillado de Centro Parilla y cuanto la encargaron de líder de Centro Parilla recibió funciones adicionales, enfocadas al control de proyecto, metodología del proyecto, hacer control al alcance, costo y tiempo del proyecto, gestión de proyecto, que actualmente tiene el encargo como líder, es líder del proyecto Interceptor Sur y adicionalmente tiene otro proyecto que es estructura de desvíos, sosteniendo que en Centro Parrilla tenía funciones adicionales a las de Efraín, esa figura de líder de lote no es un cargo dentro de EPM, sino que existe desde la metodología del proyecto.

Colofón de lo anterior, emerge claro para la Sala, que atendiendo a los encargos de la señora Eugenia Ángel Rengifo y las funciones que le fueron asignadas como líder del proyecto Centro Parrilla, no es posible determinar que el demandante ejerciera las mismas funciones que esta y en iguales condiciones, sin que pueda concluirse que la figura del encargo, prevista legalmente, este siendo mal utilizada por EPM o sea un acto meramente formal para justificar las diferencias salariales entre un cargo y otro, máxime cuando se acreditó que el actor también se benefició por un periodo largo de dicha figura.

En igual sentido, del análisis de la prueba testimonial encuentra la Sala que en efecto, es diferente el lote de acueducto al lote de alcantarillado, situación que dificulta la comparación de las funciones, resultando más complejo el lote de alcantarillado, pues la señora Eugenia Ángel también explicó que las redes de acueducto tenían un peso menor respecto al costo total del proyecto, alcantarillado era más o menos el 80% del costo total, eran como \$189.000.000.000 y el acueducto costaba \$49.000.000.000. lo que, a su vez, coincide con lo afirmado por el Jefe de Proyecto Ramón Álzate Montoya y el líder del Proyecto Hugo López, quien además explica que la complejidad mayor es para alcantarillado porque tiene unas redes de mayor diámetro, tenía unas intervenciones con unas tecnologías sin zanja que se estaban implementando, que eran un reto y un desafío, eran tecnologías nuevas de mucho impacto, hacer tuberías mediante túneles en alcantarillado, exponiendo así la parte demandada razones objetivas para considerar más complejo el lote de alcantarillado, mientras que los testigos de la activa, solo refieren como razón para la complejidad del acueducto, la necesidad de servicio de agua potable.

Reiterando la Sala que, tratándose de una nivelación salarial por funciones, ha sido uniforme la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en señalar que corresponde al actor demostrar la misma o similar cantidad de trabajo, calidad y eficiencia, aspectos que considera esta colegiatura, no fueron acreditados en el plenario y sumado a lo expuesto, cabe recordar que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha sostenido que cuando los empleados están sujetos a planes de carrera, dicha situación podría ser motivo diferente y legítimo para justificar un trato salarial diferencial, respecto de otros trabajadores que no se encuentren en carrera, así se expuso en sentencia SL16217 de 2014, reiterada en las sentencias SL6570 de 2015, SL9290 de 2017 y SL610 de 2022, al señalar:

“Así, la Sala precisa que una situación particular y diferente se presenta cuando un empleado es sujeto de un plan de carrera, deliberadamente y formalmente establecido o acordado entre dicho empleado y su empleador, que probablemente llevará a aquel en el futuro –si el plan se desarrolla en la forma prevista–, al desempeño de cargos de mayor responsabilidad y liderazgo dentro de la organización empresarial. Es decir, hay una proyección estructurada y formal de desarrollo del empleado, conformada con planes de formación académica, exposición o ejercicio de funciones para desarrollar destrezas, modelamiento de actitudes, formación en valores, etc. En tal caso, las calificaciones y títulos profesionales que acredite ese empleado en desarrollo de su plan de carrera, podrían ser motivo suficiente y legítimo para conferirle un trato salarial diferente, frente a otros empleados que desempeñen su mismo puesto, en las mismas condiciones de jornada y eficiencia, pero que no sean sujetos de un plan de carrera dentro de la empresa”.

El último planteamiento es relevante, por cuanto, igualmente, quedó acreditado que la señora Eugenia Ángel Rengifo, ingresó a EPM en octubre de 2009 directamente como Profesional categoría B, tras superar una convocatoria para dicho cargo, señalando la profesional está en propiedad, mientras que el demandante se ha presentado a diferentes convocatorias, tanto para Profesional B, como para Profesional C, sin haber superado las mismas, situación de la cual dio fe la prueba testimonial y que fue reconocida por el demandante en el interrogatorio de parte y que permite establecer una diferenciación entre uno y otro profesional.

En síntesis, si bien el señor Efraín Villa Escobar, cumplió el rol de líder de lote, al igual que la señora Eugenia Ángel, dichas funciones se desarrollaron en lotes completamente diferentes en su funcionamiento, estructura, responsabilidades, no siendo posible realizar una verificación de la igualdad de las condiciones en que cada uno desempeñó dichas funciones, máxime cuando la prueba testimonial se limita a señalar que eran funciones de líder, aunado a que se demostró que la ingeniera Eugenia Ángel, tenía funciones adicionales y encargo como líder de proyecto y superó las etapas y requisitos de la convocatoria adelantada por EPM, para el cargo de Profesional B.

Se sigue de lo anterior, revocar la providencia de primera instancia, para en su lugar absolver a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. de todas las súplicas de la demanda,

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora, inclúyase como agencias en derecho en esta instancia la suma de \$1.160.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, el 1° de marzo de 2023, en el proceso ordinario instaurado por el señor EFRAIN VILLA ESCOBAR en contra de EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P., y en su lugar, se **ABSUELVE**, a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P de todas las súplicas de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva de la providencia.


2.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)